

En cierto sentido, la historia del decenio que va de 1971 a 1982 tiene sus antecedentes inmediatos en 1968; en este año el sistema político y social de la posrevolución se vio sometido a una dura prueba. Entre julio y octubre se produjeron en la ciudad de México multitudinarias manifestaciones de estudiantes, maestros y otros grupos de clase media originadas en violentos incidentes estudiantiles en las aulas de enseñanza media y agravadas por la escalada de represión policial. Con ellas una parte significativa de la sociedad puso en duda la legitimidad del proyecto político del régimen como no había ocurrido desde 1957-1958, cuando se desarrollaron los movimientos de huelga magisterial y ferrocarrilero.

El movimiento de 1968 demandaba el respeto al espíritu democrático de la Constitución de 1917; lo cual, sin ser abiertamente revolucionario, equivalía a denunciar y rechazar las políticas autoritarias y corporativas del régimen. Asimismo, los estudiantes ponían en duda la bondad del modelo de crecimiento económico que, adoptado a partir de la Segunda Guerra Mundial, había acentuado la distribución desigual de la riqueza y era incapaz de crear empleos al ritmo adecuado para absorber los incrementos demográficos. Pese a la rápida industrialización y la modernización agrícola, este modelo reafirmaba los lazos de dependencia externa y aún daba a ésta nuevas características (por ejemplo, en el área tecnológica). En fin, de manera no muy abierta pero evidente, el movimiento del 68 también se manifestó en contra de los principales rasgos del sistema económico, al menos tal y como éste se había desarrollado en los últimos años. Los estudiantes, en su mayoría de clase media, no lograron sin embargo atraer el apoyo de los obreros y menos aún de los campesinos. A lo largo de la crisis, estos dos sectores comprobaron su cualidad de pilares políticos del régimen al rechazar los esfuerzos de los jóvenes por atraerlos hacia posiciones antigubernamentales.

La fuerte represión de los impugnadores, que culminó con la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en el corazón mismo de la ciudad de México, puso punto final a la "toma de calles"

por parte de los estudiantes. El grueso de la comunidad académica se replegó a sus espacios naturales, las universidades, pero ya con una conciencia muy crítica del sistema que no tardaría en transmitirse a las siguientes generaciones y en convertirse en análisis crítico que expondría con mayor o menor rigor las "zonas oscuras" de dicho sistema. Ello impidió así la persistencia del espíritu triunfalista en los dirigentes políticos y económicos del país. Entre 1971 y 1982 hubo una verdadera explosión de planteamientos críticos en relación al modelo desarrollista de crecimiento económico y el sistema autoritario de control político.

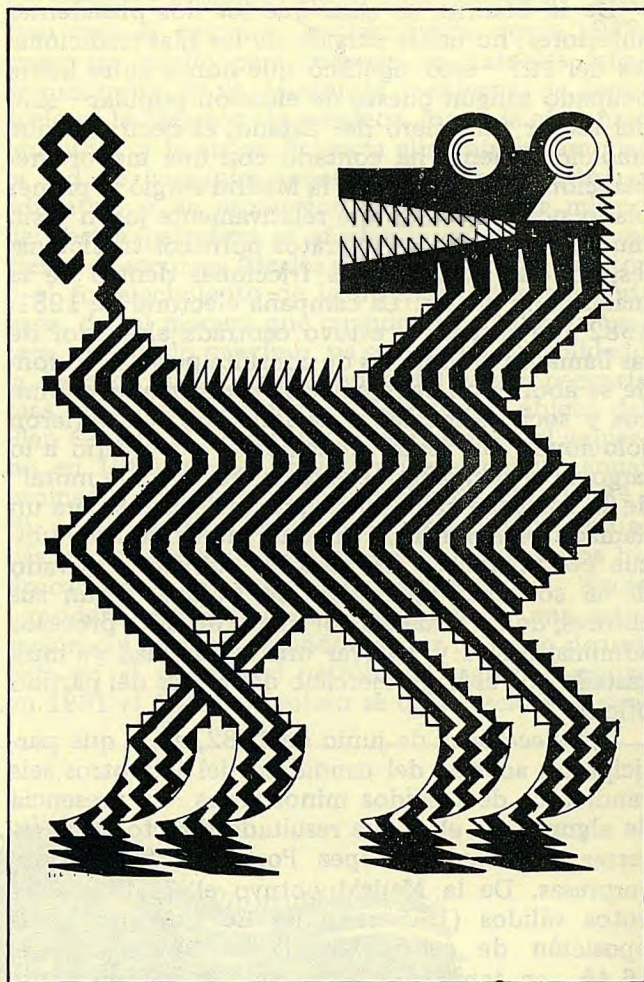
Las consecuencias del 68 no se redujeron únicamente a la "crisis de conciencia" ni a la "conciencia de la crisis". Hubo quienes consideraron que la represión no dejaba más alternativa que enfrentar la violencia con la violencia y ésta se dejó sentir de varias maneras. La guerrilla en México fue un fenómeno característico de los años setenta, sobre todo en su primera mitad. La guerrilla urbana, más estructurada ideológicamente, operó en las principales ciudades del país, mientras que la rural quedó localizada sobre todo en Guerrero, entidad plagada de problemas locales y donde la violencia era ya endémica. Ambas procuraron conectarse pero en realidad siguieron rutas diferentes y al final el aparato de seguridad del Estado logró aislarlas y desarticularlas, con lo cual prácticamente cerró este camino para la oposición. En 1977, ya durante el gobierno de José López Portillo, la amplia amnistía en favor de los presos políticos buscó aminorar el costo político de la operación antiguerrillera.

El sistema político mexicano actual ha mostrado gran flexibilidad en la respuesta a sus impugnadores: históricamente ha preferido la cooptación a la represión. La administración del presidente Luis Echeverría Álvarez abrió, desde 1971, una posibilidad para volver a poner el acento en la negociación: la llamada política de "apertura democrática". El Presidente hizo a un lado el viejo tema de la "unidad nacional" y en cambio tomó como propia la bandera de la crítica y atacó la filosofía y la práctica de la política desarrollista del pasado reciente, sobre

todo la del “desarrollo estabilizador”, por la injusticia social que había aceptado y fomentado. Desde lo alto de la pirámide del poder se escucharon entonces condenas a los que “traicionaron los nobles ideales de la Revolución”, al imperialismo e incluso al capitalismo. En la práctica, esta retórica —que tuvo ribetes claramente populistas y neocardenistas— no se tradujo en cambios fundamentales aunque sí causó zozobra en algunos sectores conservadores y empresariales.

Parte de la respuesta de Echeverría a los sucesos del 68 consistió en dotar de más recursos a las universidades, en aceptar e incluso alentar la formación de pequeñas organizaciones de izquierda como el Partido Mexicano de los Trabajadores en el primer caso y el Partido Socialista de los Trabajadores en el segundo, y en poner en libertad a la mayoría de los participantes en los hechos de 1968 (algunos de los cuales se incorporaron a la administración pública). Por otra parte, se redujeron los obstáculos a la crítica hecha a través de algunos de los medios masivos de comunicación. Al final del sexenio esta libertad de expresión, parte central de la política de “apertura democrática” echeverriísta, encontró abruptamente limitaciones, como lo mostró en 1976 el conflicto interno de *Excélsior*, el periódico nacional más importante, al que no fue ajeno un gobierno impaciente por la persistencia y agudización de la crítica independiente en el momento en que la crisis económica se agudizó. De todas maneras, el espacio conquistado por la crítica, aunque limitado, ya no se perdió.

La administración de López Portillo, que tomó el mando en diciembre de 1976 en medio de una nueva crisis de confianza, generada sobre todo por los problemas económicos y financieros, bajó el tono de la retórica aunque también admitió el fracaso del desarrollismo a la vez que continuó con la búsqueda de una solución institucional y legítima al problema que planteaba la existencia de una oposición débil pero organizada y activa. El lema de López Portillo ya no fue la “apertura democrática” sino el de un “desarrollo compartido” en donde la solución estaba en la unidad de todos los grupos sociales en torno al gobierno. Se volvió así a temas más tradicionales. En 1979, a través de una reforma de legislación sobre partidos y procesos electorales, el régimen concedió el registro oficial y sus beneficios a dos partidos de izquierda, el Comunista Mexicano y el Socialista de los Trabajadores, y a uno de derecha, el Demócrata Mexicano. Este paso se complementó con cambios en la legislación para aumentar la presencia de representantes de los partidos minoritarios en la Cámara de Diputados mediante sistemas de representación proporcional. De esta manera se abrió el Congreso a la oposición, aunque el partido del gobierno, el Revolucionario



Institucional (PRI), se aseguró de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y su monopolio en el Senado. Además, su dominio sobre la totalidad de las gubernaturas y los congresos locales y sobre la enorme mayoría de los municipios no fue cuestionado. La esencia de lo que se llamó la “reforma política” consistió, pues, en abrir un espacio limitado, pero institucional, para la oposición, precisamente para que ésta no se volviera a ver acorralada y llevada a la vía extralegal, a la violencia.

La existencia de un *boom* de la exportación de hidrocarburos a partir de 1979 así como grandes préstamos del exterior, dieron al gobierno de López Portillo recursos nuevos y suficientes para mantener y acelerar extraordinariamente el ritmo de crecimiento económico y, con ello, la vida política volvió y se mantuvo dentro de los cauces tradicionales. En septiembre de 1981, el Presidente se manifestó en favor de su secretario de Programación y Presupuesto para que éste fuera nombrado candidato presidencial del partido oficial, y de inmediato toda la maquinaria del PRI se volcó en apoyo de Miguel de la Madrid Hurtado.

De la Madrid, al igual que los dos presidentes anteriores, no había surgido de las filas tradicionales del PRI —esto significó que nunca antes había ocupado ningún puesto de elección popular— sino del sector financiero del Estado, es decir, del que tradicionalmente ha contado con una mayor preparación técnica. Con De la Madrid surgió al primer plano político un grupo relativamente joven y sin muchas ligas con los aparatos políticos tradicionales, lo que creó algunas fricciones dentro de la maquinaria priísta. La campaña electoral de 1981-1982 fue intensa y estuvo centrada alrededor de las llamadas “reuniones de consulta popular”, donde se abordaron centenares de problemas económicos y sociales locales y nacionales y se sugirieron soluciones. Un tema fundamental que corrió a lo largo de la campaña fue el de la “renovación moral” de la sociedad mexicana, que básicamente era un llamado para atacar la notable, multifasética y ubicua corrupción en los sectores público y privado de la sociedad mexicana. Se trataba, según sus autores, de un esfuerzo por modernizar los procesos administrativos y renovar una legitimidad ya muy gastada por el largo ejercicio del poder del partido oficial.

Las elecciones de junio de 1982, en la que participaron además del candidato del PRI otros seis candidatos de partidos minoritarios —la presencia de algunos de ellos fue resultado directo de la reforma política de López Portillo—, tuvo pocas sorpresas. De la Madrid obtuvo el 74.4% de los votos válidos (16.7 millones de sufragios) y la oposición de centro-derecha, el PAN, logró el 16.4%, en tanto que el partido más importante de izquierda, el PSUM, sólo pudo obtener el 3.6%; el resto de la oposición realmente no logró tener una presencia significativa; Por lo que respecta al poder legislativo, el PRI consiguió que se le reconociera el triunfo tradicional y absoluto en el Senado, así como 299 de los 300 escaños por mayoría de la Cámara de Diputados; por lo que hace a las 100 diputaciones reservadas para los partidos minoritarios registrados, el PAN se llevó la mitad. En resumen, el predominio electoral del PRI no varió mucho respecto del pasado, aunque fue advertido el relativo vigor de la derecha, pese a las divisiones internas del PAN y al poco lustre de su campaña electoral. En todo caso, la oposición de izquierda y derecha se concentró en las zonas urbanas.

Si bien la crisis política del decenio arranca desde 1968, la económica tiene su punto de partida en 1973-1974; ambas se unen en la segunda mitad de los años setenta. Ya de tiempo atrás algunos observadores y líderes de la oposición habían advertido el peligro de que la industrializa-

ción a base de sustitución de importaciones —iniciada durante la Segunda Guerra Mundial— llegara a un callejón sin salida. El meollo del problema estaba en que las posibilidades de sustituir bienes de consumo duradero y no duradero se reducían con el tiempo, y había que sentar las bases de una etapa más compleja que contemplara la sustitución de bienes intermedios en mayor escala y la de bienes de capital, aún incipiente. La tarea no era fácil dado lo exiguo del mercado interno y las deficiencias tecnológicas. Se había visto también la necesidad de impulsar la exportación de bienes manufacturados, pero el proteccionismo de los países industriales y las deficiencias en la productividad mexicana hacían muy difícil este camino. De todas formas resultaba indispensable que la industria creciera “hacia afuera” y así superara el país su dependencia casi exclusiva de las exportaciones agropecuarias y mineras.

La inflación mundial empezó a sentirse en México en 1973. Para el año siguiente ya se había instalado definitivamente. La notable estabilidad de precios mantenida desde fines de los cincuenta se fue por la borda. Las exportaciones y los ingresos netos por turismo no crecieron al ritmo de las importaciones, lo que hizo que el déficit de la balanza de pagos tomara proporciones alarmantes: pasó de 891 millones de dólares en 1971 a 3 722 millones de 1975. La desconfianza en los círculos financieros disminuyó la inversión privada e inició la fuga de divisas. Por su parte, el gobierno acudió al endeudamiento externo en gran escala y recurrió en buena medida a instituciones bancarias privadas de Norteamérica, Europa occidental y Japón, de tal modo que el monto de su deuda saltó de 4 219 millones de dólares en 1971 a 11 612 millones en 1975. Era desde luego imposible sostener esta estrategia por mucho tiempo. Además, la inflación, impulsada por el creciente déficit financiero del sector público, significaba una fuerte sobrevaluación del peso. Al producirse en 1976 ciertas expropiaciones agrarias que muchos juzgaron improcedentes, se acentuó la “dolarización” de la economía bancaria y financiera y aumentó la fuga abierta de capitales principalmente a los Estados Unidos, y en la que participaron tanto los grandes como los pequeños ahorradores. Fue así inevitable decretar la “flotación” del peso el 31 de agosto de 1976, la víspera del último informe anual del gobierno del presidente Echeverría al Congreso de la Unión. El tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar cayó de inmediato a alrededor de 20 pesos y posteriormente a 22.00 (o sea un descenso en términos de dólares de 37.5 a 43.25 por ciento).

Ante estas circunstancias, y por primera vez en mucho tiempo, en ciertos círculos nacionales y extranjeros se puso en duda la viabilidad de lo que apenas diez años antes se había calificado de “mi-

lagro mexicano". El clima de desconfianza política y económica se generalizó peligrosamente. Sin embargo, pronto surgió la posibilidad de una solución inmediata, aun cuando no de fondo, a la crisis generalizada al anunciarse el descubrimiento de nuevos yacimientos de hidrocarburos: las reservas de petróleo probadas y su equivalente en gas pasaron de 5 400 millones de barriles en 1973 a 11 000 millones en 1977 y a 72 000 millones en 1982. Las autoridades decidieron que Petróleos Mexicanos aprovechara al máximo el aumento extraordinario de los precios mundiales de los hidrocarburos; el proyecto oficial era lograr una producción de petróleo suficiente para satisfacer la creciente demanda interna de energéticos y además exportar lo necesario para disminuir el gran déficit de la balanza de pagos —agudizado en los últimos años del decenio por la importación masiva de alimentos—, pero teniendo la precaución de no llegar a crear distorsiones en la economía, debido a que no se pudieran absorber adecuadamente los nuevos recursos. La cifra que al fin se adoptó como "plataforma" o meta de producción fue de 2.7 millones de barriles diarios, aproximadamente la mitad para el mercado interno y el resto para exportación. El objetivo era

no convertir a México en un "país petrolero" más, sino usar el petróleo, nacionalizado desde 1938, como un medio para corregir las notables fallas estructurales de la economía mexicana; es decir, acelerar la creación de empleos, lograr la eficiencia industrial y la autosuficiencia alimentaria, ampliar la red de comunicaciones y mejorar los sistemas educativo y de protección social. Al auge mismo del sector petrolero se añadía la canalización creciente de recursos fiscales derivados de dicho sector y el fortalecimiento de la inversión industrial privada, de tal manera que cuando el petróleo se agotara, en el siglo próximo, ya se hubiera consolidado la base de una riqueza industrial y agropecuaria más sólida y permanente. Este fue el objeto del Plan Global de Desarrollo presentado por el gobierno en 1980, y que preveía un crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del 8%. El éxito de tan importante proyecto dependía, básicamente, de que el precio mundial de los hidrocarburos se mantuviera en ascenso. Nadie consideró seriamente la posibilidad de una saturación del mercado mundial y por lo tanto de una baja en el precio del petróleo. Desgraciadamente en 1981 el *boom* petrolero se desvaneció y el pre-

cio internacional del petróleo se vino abajo. En 1982 la crisis económica retornó pero ahora agravada. De la expectativa de crecimiento se pasó, bruscamente, a la caída en el nivel de producción, de empleo y del nivel general de vida.

Las tendencias a la concentración del ingreso, que venían de tiempo atrás, se acentuaron en el periodo debido al surgimiento de la inflación, a que las varias reformas impositivas de esos años fueron insuficientes, ya que no se atacaron radicalmente problemas estructurales de la economía, en especial la baja productividad de grandes sectores de la agricultura. Según una encuesta de la Secretaría de Programación y Presupuesto llevada a cabo en 1977, el 50% de las familias con menores ingresos recibía el 13.5% del ingreso total, y en cambio el 10% que estaba en la cúspide de la pirámide recibía el 46% del mismo.

No debe sorprender que la mayor posibilidad de actuar de la oposición, acrecentada por la reforma política, aunada a la inflación y a otros fenómenos relacionados, hayan favorecido en los años setenta un fortalecimiento de los movimientos sindicales independientes, entre los que destacaron la Unidad Obrera Independiente, la Tendencia Democrática de los Electricistas, el Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear, el Frente Auténtico del Trabajo, los sindicatos en las universidades y algunos de grandes empresas privadas. Sin embargo, aunque importante, el fenómeno insurgente estuvo lejos de poner en peligro el control del régimen sobre el grueso del movimiento obrero organizado en el Congreso del Trabajo, cuyo centro vital siguió siendo la Confederación de Trabajadores de México (CTM). En realidad y pese a ciertos roces con el gobierno de Echeverría en los inicios de su sexenio, la CTM en particular y el Congreso del Trabajo en general, se afirmaron como los pilares más sólidos del PRI, del gobierno y del régimen, precisamente por su capacidad para lograr, no obstante los efectos de la crisis económica, que los trabajadores aceptaran los toques salariales señalados por las autoridades de acuerdo con las obligaciones contraídas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1976, y que desde el punto de vista del control de la situación económica a corto plazo eran indispensables para ayudar a moderar la inflación. Estos toques desaparecieron cuando el petróleo inyectó nuevos recursos a la economía hasta hacerla crecer a un ritmo espectacular. Sin embargo, cuando el *boom* petrolero acabó y la crisis se volvió a presentar en 1982 con una inflación del 100%, al movimiento obrero organizado por el PRI le volvió a tocar la difícil tarea de frenar las demandas salariales de sus agremiados.

El control de los trabajadores organizados fue sólo una cara del problema. Según cálculos recien-

tes, los trabajadores sindicalizados suman aproximadamente cinco millones. Si a éstos se añaden otros cuatro millones de la Confederación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y otras que también son miembros corporativos del PRI, resulta que de todas formas sólo el 50% de la fuerza de trabajo estaba organizada. De los no organizados una buena parte estaba compuesta por subempleados o desempleados, es decir, por marginados. Si estos sectores hubieran sido capaces de organizarse y articular sus demandas de empleo, vivienda, salud, trabajo y servicios, el sistema simplemente no hubiera podido hacerles frente. Fue, en cierta medida, labor de las propias organizaciones del PRI y del Estado el seguir llenado este vacío mediante programas relativamente baratos de empleo rural, saneamiento, creación de algunas infraestructuras urbanas, de regularización de tenencia de la tierra de asentamientos espontáneos, así como la formación de organizaciones de colonos o la cooptación de los líderes naturales. Ahora bien, la crisis económica que se desató en 1982 requirió que el gobierno disminuyera drásticamente su déficit presupuestal (que ese año representó el 17% del PIB), y por lo tanto que muchos de estos programas de empleo y de servicios se vieran afectados. Hasta antes de la crisis, los partidos de oposición y en particular la izquierda no pudieron avanzar mucho en la organización de esta vasta masa apolítica, pese a que, en principio, los marginados debían sentir poca lealtad hacia el régimen y ser sensibles a las banderas de quienes rechazaban el *statu quo*. Es difícil predecir si las dificultades de la economía nacional cambiarán sustancialmente este panorama.

En los años setenta el tema del desempleo se convirtió en preocupación nacional prioritaria. Esto se explica en parte por el hecho de que la población del país siguió aumentando a ritmo acelerado —50.6 millones en 1970 y 70 millones en 1980—, a pesar de las políticas de planificación familiar y de diversos factores sociales y culturales que empezaron a motivar a las parejas a optar por una familia menor que la tradicional. A partir de 1975 empezó a descender la tasa de natalidad, y para 1980 el ritmo de incremento demográfico se había reducido de 3.6% a menos de 2.8% anual.

Hasta fechas recientes México era un país rural en donde el propio atraso de los sistemas productivos paliaban el desempleo a través de economías de subsistencia y autoconsumo. Para 1970, sin embargo, el 45% de los mexicanos vivía en localidades mayores de 15 mil personas, y en 1980 la proporción superó el 50%. La emigración del campo a la ciudad parecía incontenible y agudizó los ya numerosos problemas urbanos, sobre todo en la zona metropolitana de la ciudad de México

que al final del periodo contaba con 14 millones de habitantes—, en Monterrey, Guadalajara y Tijuana, y aun en ciudades menores como Coahuila de Zaragoza, Acapulco o Villahermosa.

La mayoría de los mexicanos ya no trabajaba directamente la tierra: en 1977 sólo el 40% de la fuerza de trabajo estaba dedicada a actividades agropecuarias. Esto produjo, entre otras cosas, que la mayoría de los jóvenes que ingresaban a la fuerza de trabajo debiera buscar ocupación en la industria de transformación o en los servicios; pero la expansión del empleo en estas ramas fue lenta y la demanda de mano de obra se refería crecientemente a trabajadores calificados o semicalificados, y no a fuerza de trabajo sin calificación y poca educación formal como era la que procedía de las áreas rurales. La mayor participación de la mujer en la población económicamente activa contribuyó a limitar las oportunidades de empleo para los hombres en ciertos campos. Por lo demás, pocos países como México han experimentado un rápido incremento de su población en edad de trabajar en un sistema económico insuficientemente dinámico y estructuralmente desequilibrado.

El relativo abandono del campo en el pasado inmediato no sólo alentó la emigración rural a las ciudades o hacia los Estados Unidos, además dio lugar a que la producción de alimentos y de ciertas materias primas no se adecuara al ritmo de la demanda. A ello contribuyó también la falta de estímulo a la agricultura por la vía de los precios de garantía y el mejoramiento de condiciones de producción en las áreas menos favorecidas y más pobladas. México perdió su autosuficiencia alimentaria y debió recurrir a importaciones masivas de granos, leche en polvo, azúcar y otros productos de consumo básico. Un gran debate en torno a las formas de propiedad más adecuadas para aumentar la producción actualizó la vieja discusión entre quienes apoyan y quienes atacan el ejido. De cualquier manera, al final del decenio era obvio que el gobierno procuraba hacer esfuerzos extraordinarios para revitalizar la agricultura a través de aumentos en los precios de garantía de ciertos productos agrícolas, la mejora del sistema de crédito rural, el apoyo a la mecanización del campo y la transformación de tierras ganaderas en zonas de cultivo. Todas estas políticas se resumieron en un proyecto ambicioso presentado a principios de 1980: el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que tenía entre sus metas devolver a mediano plazo al país la relativa autosuficiencia en materia alimentaria que había llegado a tener en el pasado, mejorar la conservación y comercialización de productos y elevar los niveles de nutrición de grandes sectores de la población urbana y rural. De nueva cuenta, la crisis económica dio al traste con este proyecto y al prin-

cipiar 1983 el SAM había desaparecido, y la falta de crédito unida a problemas climatológicos llevaron a que la autosuficiencia alimentaria volviera a ser una meta por alcanzar en un futuro indeterminado.

Respecto al mundo exterior, los años setenta presenciaron cambios importantes. La política de México se había caracterizado durante mucho tiempo por su naturaleza defensiva y, en cierta medida, pasiva. Los regímenes posrevolucionarios fueron bastante discretos en cuanto a la actuación de México en foros internacionales. Al tomar posesión de su cargo, en diciembre de 1970, el presidente Echeverría dejó entrever que su administración continuaría con esta práctica; sin embargo, poco tiempo después su gobierno se lanzó al campo internacional con brío y por caminos nuevos.

La razón principal fue quizá la conciencia de que México había perdido interés para los Estados Unidos y que era necesario buscar nuevas oportunidades en el mundo externo, a pesar de los factores geopolíticos. De todas maneras, si a raíz de la Segunda Guerra Mundial había existido una "relación especial" entre ambos países, ésta era cada vez más tenue, como bien lo demostraron algunas acciones norteamericanas: en 1969, sin aviso y de manera abrupta, Washington interfirió negativamente en el turismo fronterizo para obligar a México a fortalecer su campaña contra el narcotráfico; en 1971, Estados Unidos hizo caso omiso de las demandas mexicanas en el sentido de que se eximiera a sus productos del gravamen general del 10% decretado por el gobierno de ese país sobre sus importaciones.

Ante lo que México interpretó como una actitud negativa e irreversible de los Estados Unidos, el presidente Echeverría consideró necesario propiciar un acercamiento con los países del Tercer Mundo para concertar una estrategia cuyo objeto era arrancar a las naciones desarrolladas las concesiones económicas que con urgencia requerían las economías dependientes y periféricas. También fue importante crear conciencia en México de las difíciles condiciones de vida, de las que el país no estaba exento, imperantes en el mundo en desarrollo, así como de los obstáculos internacionales a los que éste hacía frente. Tomada esta decisión ya no se consideró imprudente reavivar tradiciones nacionalistas y antiimperialistas; México buscó una posición de liderato que culminó con la adopción por las Naciones Unidas, en diciembre de 1974, de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, una propuesta mexicana que contenía los principios económicos defendidos por la ma-

yoría de los países subdesarrollados en nombre de la equidad internacional.

En el plano interamericano, México menospreció la dudosa utilidad de la Organización de los Estados Americanos y en cambio apoyó con entusiasmo la creación del Sistema Económico Latinoamericano, organismo destinado a coordinar y defender los precios de las principales materias primas que exportaba la región, promover acciones coordinadas y crear empresas multinacionales latinoamericanas (incluida Cuba), entre ellas la Naviera del Caribe, para competir con las grandes compañías internacionales y disminuir los costos del transporte marítimo. En el plano político, México reactivó sus relaciones con la Cuba socialista y dio apoyo abierto al gobierno chileno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende. Cuando éste fue derrocado, México rompió relaciones con los golpistas y recibió a refugiados políticos tanto de Chile como de otros países latinoamericanos. En 1979, México suspendió sus relaciones con el régimen de Somoza y después dio apoyo abierto —político y económico— al gobierno revolucionario de Nicaragua. Cuando el conflicto civil en El Salvador se agudizó en 1981, México no aceptó la definición que del mismo hizo el gobierno norteamericano —Washington lo encuadró como parte de la confrontación Este-Oeste— y le dio más peso a los factores internos: estructuras sociales anacrónicas e injustas, y junto con Francia propuso en 1982 el reconocimiento de la organización insurgente salvadoreña como un acto político legítimo y sugirió que una solución real del conflicto tenía que ser negociada y no militar, como proponían los Estados Unidos.

En el plano interno, México intentó modificar un tanto las reglas del juego de la inversión extranjera directa y aflojar sus lazos de dependencia. Entre los resultados de esta política están las leyes de Registro de Transferencia de Tecnología, Uso y Explotación de Patentes y Marcas (1972) y Promoción de la Inversión Mexicana y Regulación de la Inversión Extranjera (1973).

Las bases económicas y financieras del esfuerzo de la administración de Echeverría por lograr un grado mayor de independencia política no eran sanas y la crisis de 1976 marcó un alto súbito en este camino internacional. El gobierno de López Portillo debió buscar, en 1977, el aval del FMI e indirectamente de los Estados Unidos para lograr un clima de confianza en la viabilidad económica del país. La participación internacional de México disminuyó notablemente; sin embargo, el muy rápido desarrollo de los nuevos recursos petroleros llevó a que pronto se recuperara el ritmo de crecimiento interno y a que los mercados internacionales de capital dejaran de preocuparse por la posible



insolvencia del país.

En las relaciones bilaterales con los Estados Unidos las tensiones volvieron a aflorar, ahora en torno a las ventas de gas natural y a la presencia en ese país de varios millones de trabajadores mexicanos indocumentados; por un tiempo, sin embargo, el petróleo dio a México una aparente nueva arma de negociación. Las importaciones masivas de alimentos procedentes de los Estados Unidos y la amenaza de un endurecimiento de la política norteamericana hacia los indocumentados resultaron ser flancos débiles de la posición mexicana, pero no impidieron que México usara su petróleo para tener mayor presencia en Centroamérica —tradicionalmente zona de influencia norteamericana—, como tampoco que reafirmara su carácter de potencia intermedia y buscar disminuir sus lazos de dependencia respecto a su poderoso vecino del norte. Un momento simbólico de este *status* fue la convocatoria que México hizo para un diálogo entre los países industriales del norte y los subdesarrollados del sur. La reunión, presidida por López Portillo, se llevó a cabo en Cancún al finalizar 1981. A la larga, el buen éxito de esta política internacional no dependería solamente de actos de voluntad, sino de la capacidad del grupo de dirigentes para solucionar los graves problemas internos del país; lograr una economía eficiente, reavivar la agricultura, aumentar la creación de empleos, propiciar una vida política más democrática y conseguir una distribución más equitativa del producto social; en suma, reafirmar la legitimidad del sistema.

Desafortunadamente, el proyecto de moderni-

zación por la vía de los excedentes petroleros se vino por tierra muy rápidamente. Para 1981 la economía mexicana se encontraba vinculada al mercado internacional básicamente a través de las exportaciones de hidrocarburos —75% del total—, y al bajar el precio de éstos en julio el déficit comercial de la balanza de pagos empezó a crecer de manera incontrolable —3 700 millones de dólares en ese año—, no sólo porque la planta industrial requería de grandes cantidades de bienes de capital y de otros insumos importados, sino por las compras masivas de alimentos producto de la crisis agrícola estructural. Erróneamente, el gobierno se negó a tomar medidas oportunas y de fondo, e intentó capear la crisis a través de préstamos externos; la paridad del peso frente al dólar se mantuvo inalterable hasta febrero de 1982, alentando una salida espectacular de divisas —varios miles de millones. A mediados de ese año, era obvio que la situación se había deteriorado irremediamente; sin reservas y sin capacidad para hacer frente a una deuda externa pública y privada de 80 000 millones de dólares, el gobierno impuso en septiembre el control cambiario —impensable apenas un año antes—, a la vez que expropió la banca privada, acusándola de haber sido ella la promotora y el vehículo para la fuga de capitales. En los últimos meses del gobierno de López Portillo, en medio de una crisis de confianza generalizada, una inflación sin precedentes en la historia moderna del país —100%— y una manifiesta corrupción del aparato político, el Presidente intentó una movilización popular para restablecer la autoridad y legitimidad del gobierno, y hacer recaer la culpa de lo sucedido en la crisis económica mundial y el sector privado, con el que hasta antes de 1982 había mantenido una relación estrecha y muy cordial. Frente al exterior, y pese al costo político que ello implicaba, el gobierno de México debió de buscar una vez más la ayuda del FMI y de los Estados Unidos para no caer en la insolvencia, a la vez que renegociar con los bancos internacionales el pago de la deuda.

En diciembre de 1982, Miguel de la Madrid asumió el poder en medio de una profunda crisis económica y política y con un país más dependiente del exterior que antes. El programa del nuevo gobierno fue de emergencia, y puso énfasis en la necesidad de seguir una política de austeridad (reducir el déficit del sector público en un 50% para 1983 y aumentar los impuestos), recobrar la confianza del sector privado de la economía, de la banca internacional, condenó el “populismo” del pasado y ofreció, a cambio, una administración eficiente, realista y honrada. Al iniciarse 1983 el sistema político se enfrentaba a una de las pruebas más difíciles desde su consolidación en 1940. Su legitimidad misma estaba en juego.